

Región Murciana

El nuevo plan de recortes se ceba con los empleados públicos

BAJO LA pomposa (y redundante) denominación de Plan Económico Financiero de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Gobierno regional presentó el pasado 16 de mayo en la Mesa General de Negociación un nuevo plan de recortes, el cuarto en los dos últimos años y medio.

El documento es la continuación de una política ya fracasada de insistencia en los recortes que no ha conseguido en el pasado reciente otra cosa que sumir a la región en la recesión económica, en el aumento de las tasas de paro y en el hundimiento del consumo interno. Como consecuencia se ha más que duplicado el objetivo del déficit de 2012, que alcanzó el 3,02%.

El plan hace caer el peso de la demostrada incompetencia del Gobierno regional sobre las espaldas de los empleados públicos, funcionarios y personal laboral, que ven una vez más disminuidas sus retribuciones al ser una de las medidas estrella la eliminación de la mitad de las pagas extras de diciembre de 2013 y de junio de 2014, lo que viene a suponer una pérdida promedio del 5,5% de las retribuciones anuales.

A esta medida se le añade un misterioso e indeterminado “bloqueo de partidas presupuestarias” por un importe de 35 millones de euros, mediante el cual, y a discreción de la Consejería de Hacienda, no se ejecutarán determinadas partidas presupuestarias. En CCOO tememos que por esta vía desaparezcan programas educativos como el PROA y otros de atención a la diversidad o dedicados a la educación compensatoria o a la inclusividad. El anunciado aumento de tasas y precios públicos nos hace temer también nuevas dificultades para nuestros jóvenes en su pretensión de acceder a la universidad o de proseguir sus estudios universitarios.

Además se contemplan subidas de impuestos y creación de otros que, siendo correctos, no tendrán efectividad hasta 2014, por lo que difícilmente podrán equilibrar el presupuesto de este año, y, al margen de políticas de estímulo de la actividad económica, pueden acabar no significando aumentos recaudatorios. La utilidad de estas medidas es más que cuestionable en una región, como la murciana, campeona en fraude fiscal (informes de Hacienda estiman que los empresarios murcianos declaran ingresar anualmente 9.000 euros menos que lo que declaran de media los trabajadores por cuenta ajena) y en economía sumergida. En estas condiciones es más que probable que la subida de impuestos vuelva a recaer fundamentalmente sobre los trabajadores y sirva principalmente para deprimir aún más el consumo. Se anuncia un nuevo intento de venta de patrimonio que, en las actuales circunstancias del mercado inmobiliario, en caso de materializarse solo puede traducirse en el desprendimiento, a precio de saldo, de elementos del patrimonio común en beneficio de entes privados.

El Área Pública de CCOO ha rechazado con rotundidad esta nueva agresión a los servicios y empleados públicos y ha anunciado que no entrará a la negociación del plan, al que califica de conjunto de imposiciones. Además ha denunciado que lo que el Gobierno regional presenta como proceso de negociación es una farsa, desde el momento en el que las decisiones ya están tomadas y las reuniones que se convocan se hacen a los meros efectos de cumplir la formalidad legal de haber negociado

y la material que le permite acceder al Plan Estatal de Pagos a Proveedores y al Fondo de Liquidez Autonómico.

El plan pone de manifiesto la situación de práctica quiebra técnica de la comunidad autónoma y el riesgo más que evidente de que deba ser rescatada-intervenida por el Gobierno central. El Área Pública de CCOO ha pedido la dimisión del Ejecutivo regional ante la evidencia de su incapacidad para gestionar la crisis económica, social e institucional en que la región está sumida.